

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 5 de febrero de 2021

Auto Interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	760001-33-33-006-2013-00381-01
DEMANDANTE:	GUIOMAR OBREGON QUIÑONEZ Y OTROS abogarrepresentaciones@hotmail.com
DEMANDADO:	HUV Y OTROS
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 588 del 22 de mayo de 2019¹, proferido en audiencia de pruebas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, mediante el cual el despacho decide que la etapa probatoria se encuentra ampliamente superada y niega el decreto de la prueba pericial solicitada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, los señores Guiomar Obregón Quiñonez y otros, demandaron al Hospital Universitario del Valle y otros, para que se declaren administrativamente responsables de la muerte de la señora Ruth Atocha Quiñonez de Obregón.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 588 de fecha 22 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali en audiencia de pruebas, negó la practica del dictamen pericial solicitado por la parte demandante, visible a folios 138 a 139 del expediente, bajo los siguientes argumentos²:

“PRUEBA PERICIAL

“ Pasa ahora a decidir lo que corresponda frente a la solicitud del apoderado de la parte demandante de requerir a la entidad Cendes para qué rinda el dictamen.

(...)

Escuchada la apoderada de a la parte demandante que solicita ordenar la práctica de la prueba a través de otras entidades a mencionado Cendes, Universidad San Buenaventura, o otro experto perito que pueda dictaminar sobre lo solicitado y también se han escuchado a los demás apoderados y apoderadas de las entidades demandadas y llamadas en garantías, específicamente el apoderado de Fabilu Ltda., ha solicitado que se cierre el debate probatorio en atención al tiempo que ha transcurrido la etapa de pruebas en el presente proceso, solicitud que fue coadyuvada por lo demás sujetos procesales que integran la parte pasiva y también por los llamados en garantía.

El despacho de poner presente que en este caso se han desplegado las actuaciones necesarias para la obtención de la prueba, decretada en favor de la parte actora, se ofició a Medicina Legal y Ciencias forenses, a la Universidad Cendes y finalmente se ofició a la Universidad del Valle, sin

¹ Ver folios 160 a 164

² Ver CD Audiencia de Pruebas (fl. 177) Intervención min: 024:23 al 28:34.



lograr ese recaudo; sin embargo, el proceso judicial a pesar de ese requerimiento que se ha hecho a diferentes entidades no puede paralizarse en su trámite y máxime cuando los términos para adelantar la etapa de pruebas se encuentran ampliamente superados el artículo 42 del C.G.P específicamente en el numeral 1° impone al Juez el deber de dirigir el proceso, de velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y dilación y procurar la mayor economía procesal esta norma constituye un claro ejemplo del desarrollo del principio de la economía procesal cuyo propósito es lograr que los procesos se adelanten en forma pronta, para procurar una eficiente administración de Justicia cómo lo prevé el artículo 7° de la ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” aparejado con este deber funcional que se reitera está consagrado en el artículo 42 de CGP debe tenerse presente también los deberes de las partes en un proceso judicial destacándose el deber constitucional de colaboración con el buen funcionamiento de la administración de Justicia que se encuentra consagrado en el artículo 95 numeral 7 de la Constitución Política, lo que incluye ese deber la consecución y la práctica de las pruebas. De acuerdo con lo expuesto el despacho considera que en este proceso no hay lugar a aceptar la solicitud de la parte demandante por lo tanto el despacho decidirá cerrar el debate probatorio, prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento dispondrá correr traslado para presentar alegatos por escrito.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto nro. 588 del 22 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, argumentado:

“ Su señoría con todo respeto interpongo recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión que acaba de proferir de no designar o no acoger la solicitud para que se agote la prueba pericial, por cuanto en este tipo de procesos tan complejos como el de responsabilidad médica, paramédicos, extra- médico, que debe revisarse en este tipo de actuaciones, la prueba del perito médico es muy importante pertenece al tarifario de un porcentaje alto que se debe evaluar dentro del procedimiento y mis han realizado todas las diligencias y han hecho todo lo posible para que puedan acceder a la prueba y se puede hacer finalmente justicia como debe ser, pero no nos parece justo castigar o sancionarnos no pudiendo acceder a la prueba cuando es posible ya que relevó a la Universidad del Valle designar a un perito de otra Universidad como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la misma Universidad Cendes, uno de los demandados indicó manifestó que se había negado pero la verdad es que lo que ocurrió fue que fue relevado por la Universidad del Valle, no considero que sea justo que los peritos se nieguen a realizar la prueba judicial y sencillamente se dejen a las partes sin la posibilidad de probar los susodichos de la demanda por todo lo anterior, le ruego el favor reconsidere su decisión y en su defecto decida lo que justa equitativamente corresponda, y en su lugar si la decisión no es aceptada entonces me conceda el recurso de alzada.(...)”³

V. CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011⁴, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

³ Ver audiencia de pruebas folio 177: (intervención minuto 0:25:54 a minuto 0:31:10)

⁴ “**Art. 243.-** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
(...)”

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”



Si es procedente en este asunto cerrar el debate probatorio, ante la dificultad de la obtención de la prueba pericial o si por el contrario debe accederse a la solicitud de la parte demandante bajo los argumentos de que la prueba es de vital importancia para este tipo de procesos.

5.3. TESIS DEL DESPACHO

El Despacho revocará la decisión de primera instancia, en cuanto que el a quo debe velar por el acceso a la administración de justicia de las partes, pues en virtud del amparo de pobreza concedido debe otorgar a los demandantes la oportunidad del decreto de la prueba pericial solicitada, en razón a la trascendencia de la misma para este tipo de procesos.

5.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320⁵ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁶ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

A su turno, el artículo 328 ibídem dispone entre otros aspectos que: *“el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”*.

Aclarado lo anterior, en el caso objeto de estudio se tiene que en la audiencia de inicial celebrada el 18 de noviembre de 2016⁷, el a quo, decretó entre otras la práctica de la prueba pericial, para lo cual dispuso que se oficiara al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de que de que previa valoración de la historia clínica de la señora Ruth Atocha Quiñonez de Obregón determinen si hubo fallas, errores, negligencias, imprudencias e impericias, violación de protocolos médicos, omisión, abandono del pos- operatorio, servicio médico tardío, como en el protocolo médico que debió haberse preservado y respetado para dicha clase de procedimiento, y en general la actividad médica desplegada y desarrollada.

Luego de requerir la prueba pericial, sin obtener respuesta alguna de la entidad, mediante audiencia del 5 de abril de 2017⁸, se dispuso suspensión de la continuidad de la audiencia de pruebas, puesto que el dictamen pericial no había sido allegado.

Posteriormente, mediante audiencia de pruebas del 18 de abril de 2017⁹, se dispuso requerir nuevamente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de que allegara el dictamen pericial solicitado a través del oficio nro. 136 del 1 de febrero de 2017.

El 12 de septiembre de 2017¹⁰ mediante auto nro. 1074 dictado en audiencia de pruebas se dispuso que en el término de diez (10) días el apoderado de la parte actora debía acreditar las gestiones realizadas para la obtención de la practica de la prueba pericial, so pena de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 178 del CPACA. En la continuidad de esta audiencia,

⁵ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

⁶ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁷ Ver folios 111 a 116

⁸ Ver foios 124 a 126

⁹ Ver folio 132

¹⁰ Ver folios 133 a 134



mediante auto nro. 1080 se dispuso nuevamente requerir al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de que allegara el dictamen pericial solicitado.

El 23 de enero de 2018¹¹, mediante auto nro. 52 se dispuso requerir al apoderado de la parte demandante con el fin de que aportara las expensas para la reproducción de todo el expediente, so pena del desistimiento tácito de la prueba consagrado en el artículo 178 del CPACA.

Mediante auto nro. 796 del 5 de junio de 2018¹², se dispuso designar como perito a la Universidad CES de la ciudad de Medellín, para que designara un especialista neurocirujano con el fin de que practicara el dictamen pericial. Lo anterior, por cuanto el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses manifestó no contar con un especialista en dicha área.

Mediante auto interlocutorio nro. 708 del 03 de octubre de 2018¹³, el a quo resolvió otorgar a los demandantes el amparo de pobreza solicitado, debido al costo de la prueba pericial, informado por la Universidad Ces. De igual forma, dispuso relevar del dictamen a dicha universidad, argumentando que el elevado costo de la experticia no puede ser sufragado por los demandantes. En tal razón, dispuso designar a la Universidad del Valle- Facultad de Salud- Departamento de Neurocirugía para que realizara el dictamen pericial solicitado. Entidad que fue relevada de su encargo, al aceptarse el impedimento formulado para presentar el dictamen pericial¹⁴.

En vista de lo anterior, considera el Despacho que los argumentos expuesto por el a quo para desistir de la prueba pericial no son del todo recibidos, pues de los documentos que fueron allegados con el escrito de apelación se advierte la importancia de la prueba pericial solicitada y decretada para el esclarecimiento de los hechos.

Nótese que dentro de las actuaciones adelantadas por el a quo, se encuentra el otorgamiento del amparo de pobreza a los demandantes para la consecución de la prueba pericial, sin embargo, se escapa de la órbita de esta instancia la razón para relevar a la única universidad que hasta el momento había manifestado su facultad de realizar el dictamen pericial, además del hecho de designar a una entidad que a todas luces se encontraba impedida para rendir el dictamen solicitado, por cuanto el Hospital Universitario del Valle es parte pasiva en este proceso.

Dicha decisión va en contravía del acceso a la administración de justicia, si ha consideración se tiene que precisamente el objetivo de ese amparo de pobreza es el cubrir aquellos gastos que los demandantes no están en capacidad de soportar.

Con relación al amparo de pobreza, la Corte Constitucional ha manifestado:

“...Amparo de pobreza. Presupuestos generales y su valoración respecto de la prueba decretada de oficio

El amparo de pobreza es una institución de carácter procesal desarrollada por el Legislador para favorecer a las personas que por su condición socioeconómica no pueden sufragar los gastos derivados de un trámite judicial.

De manera que esta figura se instituye legislativamente como una excepción a la regla general, según la cual, en las partes recae el deber de asumir los costos que inevitablemente se producen en el trámite jurisdiccional, para en su lugar, proteger a las personas que se

¹¹ Ver folios 137 a 139

¹² Ver folios 140 a 141

¹³ Ver folios 149 a 150.

¹⁴ Ver folios 160 a 164.



encuentran en una situación extrema, representada en la carga que se les impondría al obligarlas a elegir entre procurar lo mínimo para su subsistencia o realizar pagos judiciales para el avance del proceso en el que tienen un interés legítimo¹⁵.

Con ello queda claro que el propósito del amparo de pobreza no es otro distinto al interés de asegurar que todas las personas puedan acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones y que, por ende, puedan ejercer los derechos de defensa o contradicción, sin que exista distinción en razón de su situación socioeconómica¹⁶.

(...)

Cuando el amparo se concede, precisa la norma que “el amparado (...) no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas (Art. 154, inciso primero).

(...)

En el caso de que sean auxiliares de justicia además ha previsto el Legislador que “el juez fijará los honorarios de los auxiliares de la justicia conforme a las reglas generales, los que serán pagados por la parte contraria si fuere condenada en costas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga” (art. 157).

(...)

Ahora bien, para valorar los efectos del amparo de pobreza deberá tenerse en cuenta el inciso final del artículo 154 del Código General del Proceso que indica que “el amparado gozará de los beneficios que este artículo consagra, desde la presentación de la solicitud”. (Subrayado fuera del texto).

Cabe señalar que la lectura que pueda efectuarse de la expresión “desde la presentación de la solicitud” admite, al menos, dos interpretaciones que resultan relevantes para el caso que aquí se analiza. Una que sugiere que el amparo de pobreza cubre los gastos del proceso fijados desde la fecha de la presentación de la petición. De manera que, en el caso de la prueba decretada de oficio, si el costo fue establecido con anterioridad –en el tiempo- a la radicación de la solicitud, la consecuencia será la sustracción de este medio probatorio.

Pero, además de la anterior, existe otra más amplia, que apunta a que el amparo de pobreza cubre los gastos ordenados desde la etapa procesal en la que se plantea la solicitud. En consecuencia, si la solicitud fue radicada en el momento de la práctica probatoria, entonces, los efectos del amparo operarían desde este acto procesal.

(...)

Por último, vale la pena precisar que las anteriores consideraciones no desconocen, de ninguna manera, la regla prevista en el 364 del Código General del Proceso, que indica que “cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las diligencias y pruebas que solicite y contribuir a prorrata al pago de los que sean comunes”, en la medida que el ordenamiento procesal establece como regla que las pruebas decretadas de oficio se asumen por mitad por cada una de las partes, mientras el juez decide definitivamente el conflicto y con ello determina quién debe asumir las costas del proceso, salvo en el amparo de pobreza, cuyo reconocimiento invierte esta regla general...”¹⁷

De conformidad con lo expuesto, es evidente que al haberse otorgado el amparo de pobreza la parte demandante no estará obligada a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia o cualquier otro gasto de la actuación, y tampoco será condenado en costas¹⁸.

¹⁵ Cfr., Corte Constitucional, Sentencia T-114 de 2007.

¹⁶ Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-808 de 2002.

¹⁷ Sentencia T-338 del 22 de agosto de 2018. Referencia. Expediente: T-6.668.539. Asunto: Acción de tutela presentada por Leidy Mercedes Moreno Salamanca, en nombre propio y representación de Karoll Yisel Guerrero Moreno, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

¹⁸ De acuerdo con lo prescrito por el artículo 154 del Código General del Proceso.



Teniendo en cuenta lo anterior, debe indicarse que el a quo luego de analizar los presupuestos necesarios para su procedencia concedió a la parte demandante dicho amparo, lo cual no está en discusión en esta instancia, sin embargo, al haberse concedido el amparo debió darse aplicación al mismo y proceder a adoptar las determinaciones pertinentes, procurando que la práctica de la prueba resulte lo menos onerosa posible.

Para lo anterior, el a quo deberá atender lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 229 del Código General del Proceso¹⁹, acudiendo a una institución pública o privada de reconocida trayectoria e idoneidad, que tenga facultades de practicar la prueba solicitada.

En tal razón, el juez deberá velar por la consecución de la prueba sin dejar de lado los principios procesales de celeridad y economía procesal, haciendo uso correcto de las herramientas que le ofrece la ley procesal para su desistimiento, además de llamar la atención a la parte demandante, pues pese a que le fue concedido dicho amparo, tal situación no la despoja de sus obligaciones respecto a la carga probatoria, en asuntos tan complejos como el particular.

En virtud de lo expuesto, se revocará el auto nro. 588 del 22 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio nro. 588 del 22 de mayo de 2019 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, que desistió de la práctica de la prueba pericial y cerro el debate probatorio, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.²⁰

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

¹⁹ "Artículo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer lo siguiente: (...)

2. Cuando el juez decreta la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad".

²⁰ Yurani López
VoBo Secretario

Radicación : 2013-00381-01
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Demandante : GUIOMAR OBREGON QUIÑONEZ Y OTROS
Demandado : HUV Y OTROS

